

A un año...

# La corrupción del modelo y la protesta social

En Diciembre se cumple un año de gobierno de la Alianza. Cuando estamos escribiendo estas líneas nos sacude la noticia de la muerte de un obrero desocupado, Anibal Verón, en Salta, donde la protesta popular ha recrudecido ante la falta de respuestas por parte de las autoridades que se siguen tirando la pelota de la responsabilidad uno a otro, del gobierno provincial al nacional y del nacional al provincial. La violencia popular de Tartagal es apenas una muestra de lo que viene recrudeciendo en los últimos meses. Cortes de ruta, repetidos desde principios de año, en las provincias del Sur, en el norte chaqueño y ahora también en el conurbano bonaerense, con La Matanza, Berisso y otras ciudades, donde los pobladores reclaman trabajo, comida, vivienda...A esto se le suma el reclamo de los productores agrarios del sur cordobés y norte bonaerense por la falta de respuesta gubernamental ante las prolongadas inundaciones de sus campos. En un compás de espera han quedado los tractores y camiones que paralizan las rutas del país en contra del cobro de peajes.

Mientras esto sucede en Mar del Plata los "gurús" del poder económico se reúnen para exigirle al Presidente De la Rúa mayor firmeza en el ajuste. Manuel Solanet, uno de ellos, acaba de profetizar el mismo día en que la represión asesina al obrero Verón, que "llegó el tiempo de la cirugía mayor y se acabó el momento de las aspirinas porque la fiebre subió muy alto..." advirtiendo que el gobierno "puede tener el ruido de los gremios del estado y del entorno ideológico combativo, pero tendrá el apoyo de los que pagan los impuestos". Seguramente no serán sus cofrades, porque las estadísticas dicen que la mayor evasión impositiva se registra justamente entre los grupos económicos más concentrados. Los que más pagan en cambio son los que menos tienen, aunque ahora estén todavía más agobiados. Los aprietes a De la Rúa se dan en un momento en que más se expresa la voracidad del capital financiero. El gobierno ha debido recurrir al préstamo internacional con tasas de interés más elevadas. A cambio del mayor endeudamiento la bondad del Fondo Monetario Internacional promete más ayuda, claro que a cambio de los ajustes que todavía no se han hecho a fondo, como la desregulación de las obras sociales, la total privatización del sistema previ-

sional y más achicamiento del gasto público, que tendrá sus efectos en la coparticipación federal que va a las provincias, y de ellas a los municipios, afectando los servicios esenciales que el estado debe garantizar como la salud, la educación o los planes de vivienda.

En este mismo día -10 de noviembre, día de la tradición- los obispos católicos reunidos en San Miguel elevan su voz para decir que la protesta en los cortes de ruta es el termómetro indicativo de una enfermedad social que se agrava día a día. Y hasta algunas expresiones episcopales que nunca se destacaron por su rol profético advierten hoy sobre la conveniencia de atender las necesidades de la gente antes que cumplir con el pago de los intereses de la interminable deuda externa. Mensaje impensable en otros momentos que revela la gravedad de la situación. La palabra de los obispos ha venido creciendo a lo largo del año, al calor de los reclamos que sufren sobre todo los pueblos más alejados de los centros de poder. En algo ayudó también la postura del Papa Juan Pablo II ante la agobiante deuda externa.

Estos escenarios que se nos muestran al llegar al primer año de gobierno aliancista no son más que la repetición cada vez más agudizada de una película que los argentinos venimos padeciendo. La Alianza del binomio De la Rúa-Alvarez ganó las elecciones con un voto que fue ante todo contra la continuidad del menemismo, haciendo bandera con la transparencia. Si bien no se esperaban grandes cambios a nivel de la política económica, se generaron las lógicas expectativas que produce todo cambio de gobierno. Sin embargo el Presidente De la Rúa se encargó de frustrarlas apenas designó cinco economistas como Ministros de su gabinete. Fue el signo más claro que la hegemonía la seguía teniendo el poder económico. En ese camino el Ministro Machinea balanceaba entre las posturas más conservadoras de López Murfhy, que ocupó la cartera de Defensa, y las un poco más progresistas de Terragno, que como Jefe de Gabinete fue reemplazado hace un mes por otro economista: Christian Colombo, que homogeneiza el equipo de gobierno, ahora sí apoyado por el paradigmático Domingo Cavallo, el máximo *gurú* neoliberal que iluminó el gobierno de Menem, quien vuelve a apare-



*Violencia policial y saqueos en Salta, tras la disolución de un piquete y la muerte del obrero Aníbal Verón.*

cer en escena no sólo para mostrar su noviazgo farandulero con la modelo chilena sino para dar lecciones de *governabilidad* a su sucesor De la Rúa.

Los meses del año 2000 estuvieron salpicados por las contradicciones que profundizan día a día el conflicto social ante una realidad de mayor concentración y extranjerización económica por un lado y mayor empobrecimiento y miseria social por el otro. Para obedecer el mandato fondomonetarista de mayor ajuste el gobierno nacional dispuso la rebaja salarial de los empleados estatales, achicó las partidas presupuestarias destinadas a la educación y avanzó en una mayor presión para el ajuste en las provincias, en un contexto donde la recesión continúa y crece el nivel del desempleo.

En este marco creció la protesta social. A los reclamos aislados y hasta desesperados de los piqueteros en los cortes de rutas, se le sumaron las protestas obreras encabezadas por la Central de Trabajadores Argentinos y la CGT disidente, que encabeza el camionero Hugo Moyano. La Marcha Grande por el Trabajo, que la CTA realizó desde Rosario a Buenos juntando el millón de firmas para plesbicitarse un Seguro de Empleo y Formación de \$ 380 para todo jefe o jefa de familia desocupada más una asignación de \$ 60 por hijo fue otro de los hechos importantes porque junto a la protesta callejera estuvo la propuesta de solución, demostrando que existen riquezas suficientes en el país que necesitan ser mejor distribuidas. La negativa del gobierno a reglamentar la iniciativa popular establecida en la reforma constitucional de 1994, que haría posible plesbicitarse esta propuesta de la central de trabajadores, obligará a nuevas acciones para poner en marcha un Movimiento por la Consulta Popular en todo el país, que dejará mayores saldos organizativos capaces de canalizar la protesta social que obliguen respuestas por parte de los gobiernos.

La grave situación social está diciendo que no bastan los gestos para transparentar la política, como buscó ser la renuncia del Vicepresidente Chacho Álvarez ante el escándalo de las coimas en el Senado de la Nación. Junto a la necesidad de combatir la corrupción instalada en la esfera política pero alentada por el poder económico, que hizo posible la votación de la

ley de reforma laboral, así como en Córdoba lo fue con la de las privatizaciones, hacen falta respuestas concretas a las demandas por la sobrevivencia de los más empobrecidos. Porque lo verdaderamente corrupto es el modelo mismo que además de negarle el derecho a la vida digna de las mayorías, utiliza arbitrariamente todas las herramientas del estado para asegurar la permanencia de los privilegios en una injusta distribución de la riqueza. Además la sociedad constata que la proclamada lucha contra la corrupción tampoco ha tenido señales claras. No se sabe que la menemista María Julia Alsogaray, que todavía sigue en libertad, haya devuelto algunos pesos. Alderete por su parte sigue buscando los vericuetos de la justicia para zafar de las acusaciones. Y los tantos senadores apuntados por coimeros no han ido más allá de alguna renuncia a sus puestos. Mientras los medios de prensa han mostrado las mansiones en las que viven políticos como los senadores Alasino, Constanzo y otros en contraste con la miseria de sus propios comprovincianos que los han votado, las políticas sociales lejos de incrementarse se han achicado.

Se restringen los planes de ayuda social y los precarios planes de empleo que se instrumentan no alcanzan a frenar el acelerado ritmo de la desocupación, que acarrea el quiebre de la pequeña y mediana empresa, quien históricamente ha marcado el 80% del empleo en el país. Las inversiones golondrinas de las automotrices, beneficiadas con todo tipo de exención impositiva, además de significar sólo un especializado nivel de empleo para poca gente, levantan vuelo al poco tiempo en el marco de las políticas diferenciadas en el ámbito del Mercosur, que hasta el momento no han demostrado ser beneficiosas para nuestro país.

A un año de gobierno la deuda de la Alianza con la gente ha crecido. También creció, al calor de la protesta social, la conciencia sobre el valor de la organización popular que permita canalizar las demandas. Y en este andar seguramente podrá encauzarse una representación política que termine con las viejas formas dando nacimiento a expresiones nuevas que contengan aquellas demandas y potencien la articulación del movimiento social.

**Luis Miguel Baronetto**  
10 de noviembre de 2000